

San Salvador, 29 de mayo del 2009.

Se ha emitido la RESOLUCION No. 201, que literalmente dice: "..... MINISTERIO DE ECONOMÍA: San Salvador, a las diez horas treinta minutos del día veintisiete de mayo de dos mil nueve.

Visto el Recurso de Apelación interpuesto por en el Licenciado **PEDRO VALLE**, de generales conocidas, en calidad de Apoderado General Judicial de la Sociedad **"COMMERCE GROUP CORPORATION"**, para ante el Ministro de Economía, en contra de la Resolución número Doscientos Cuarenta y Seis, emitida por la Dirección de Hidrocarburos y Minas de este Ministerio, a las nueve horas del día veintiocho de octubre de dos mil ocho.

**LEIDOS LOS AUTOS,
Y CONSIDERANDO:**

I- Que la Dirección de Hidrocarburos y Minas emitió la Resolución ya mencionada, declarando sin lugar la solicitud de prórroga de Licencia de Exploración de Minerales, específicamente oro y plata, en el área denominada "SAN SEBASTIAN"; solicitud que fue declarada sin lugar por no haberse presentado el permiso ambiental exigido en el Artículo 21 letra "e" y 24 letra "b)" de la Ley de Medio Ambiente. Inconforme con ella, la Sociedad "COMMERCE GROUP CORPORATION" presentó Recurso de Apelación solicitando "se abran a pruebas las presentes diligencias a fin de determinar el cumplimiento legal del proceso de declaratoria sin lugar, de una solicitud presentada el día ocho de marzo de dos mil siete".

II- Que posteriormente se admitió el Recurso de Apelación antes mencionado, y de conformidad al artículo 45 de la Ley de Minería, se concedió audiencia al recurrente por el término de Ley, quien al hacer uso de su derecho, manifestó en resumen: **(1)** que se presentó solicitud del permiso ambiental en el Ministerio de Medio Ambiente el día diez de octubre de dos mil seis, y que el día dieciséis de mayo de dos mil siete la Dirección de Hidrocarburos y Minas le previno sobre la presentación de ese permiso, sin tenerlo a esa fecha; **(2)** que al transcurrir algunos meses sin tener respuesta del Ministerio del Medio Ambiente, presentó una solicitud de "plazo moratorio" el día treinta y uno de octubre de dos mil siete, "con lo cual se esperaba haber subsanado la prevención que le hiciera la Dirección de Hidrocarburos y Minas, de presentar el estudio de impacto ambiental"; y **(3)** que de conformidad al Artículo 229 del Código de Procedimientos Civiles, "al impedido con justa causa no le corre término, ni se le considera rebelde para tener por contestada la demanda ni por desierta la acción", y tal impedimento dio inicio a partir del día diez de octubre de dos mil seis, fecha en la cual se presentó la solicitud

correspondiente ante el Ministerio de Medio Ambiente.

III- Respecto de la declaratoria sin lugar de la solicitud presentada por el recurrente, se tiene a bien hacer las siguientes consideraciones:

A) De conformidad con los Artículos 86 inciso último y 235 de la Constitución, los funcionarios de Gobierno no tienen más facultades que las que expresamente les da la ley, y al tomar posesión del cargo, protestan “cumplir y hacer cumplir la Constitución” y prometen “el exacto cumplimiento de los deberes que el cargo le impone”. La presentación del permiso ambiental como requisito previo al otorgamiento de la licencia de exploración, está regulada en el Artículo 21 literal “e)” de la Ley de Medio Ambiente, que expresamente manifiesta: “*Toda persona natural o jurídica deberá presentar el correspondiente Estudio de Impacto Ambiental para ejecutar las siguientes actividades, obras o proyectos: ... e) Exploración, explotación y procesamiento industrial de minerales y combustibles fósiles...*”. Además, el Artículo 19 de la misma Ley de Medio Ambiente expresa: “*Para el inicio y operación de las actividades, obras o proyectos definidos en esta ley, deberán contar con un permiso ambiental. Correspondrá al Ministerio emitir el permiso ambiental, previa aprobación del estudio de impacto ambiental*”. Este artículo 19 tiene por título “COMPETENCIA DEL PERMISO AMBIENTAL”, y se complementa con lo manifestado por el Artículo 21 de la misma Ley, que lleva por título precisamente “ACTIVIDADES, OBRAS O PROYECTOS QUE REQUERIRÁN DE UN ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL”. Esto significa que la presentación del permiso ambiental no es potestativo, sino imperativo para quien solicite licencia de exploración, y a su vez es deber de la Dirección de Hidrocarburos y Minas solicitarlo como requisito previo para la extensión de dicha licencia; de tal manera que, de no cumplirse dicho requisito, la Dirección está impedida de extender tal solicitud de licencia, aunque se cumplieren los demás requisitos. El Artículo 38 de la Ley de Minería, en su segunda parte, menciona que “... en caso de no presentarse (la solicitud) con los requisitos de ley, se otorgará al interesado un plazo que no excederá de 30 días para que subsane las omisiones; si transcurrido dicho plazo no las subsanare, se declarará sin lugar la solicitud y se ordenará el archivo de la misma”. En el presente caso, por auto de las nueve horas del día diecisésis de mayo de dos mil siete, la Dirección de Hidrocarburos y Minas resolvió prevenirle a la Sociedad “COMMERCE GROUP CORPORATION” que presentara en el término de treinta días, entre otros, copia certificada por Notario del Permiso Ambiental de la Licencia de Exploración “SAN SEBASTIAN”. El día catorce de junio de ese mismo año, el Licenciado PEDRO VALLE, como Apoderado General Judicial de la Sociedad mencionada, presentó un escrito informando que ya había hecho la solicitud correspondiente en el Ministerio de Medio Ambiente para la obtención del Permiso Ambiental desde el día diez de octubre de dos mil seis, y que a esa fecha no había obtenido respuesta alguna; solicitando tener por cumplida la prevención señalada, y que en resolución final se le conceda a la Sociedad representada la prórroga de la Licencia de Exploración solicitada. Lo anterior demuestra que la Dirección de Hidrocarburos y Minas dio cumplimiento a lo establecido en la Ley de Minería, en cuanto a otorgarle el plazo de ley para solventar la omisión, y que el solicitante no pudo cumplir con el requerimiento de ley.



B) Según escrito presentado el treinta y uno de octubre de dos mil siete, el Licenciado PEDRO VALLE, siempre como Apoderado de "COMMERCE GROUP CORPORATION", solicitó se les concediera un "plazo moratorio" para la Licencia de Exploración de "SAN SEBASTIAN", para que "no se tome en consideración el plazo legalmente otorgado para dicha Licencia, sino hasta que se resuelva la solicitud presentada en su debida oportunidad" tanto en este Ministerio como en el Ministerio de Medio Ambiente. Lo que el Apoderado de la Sociedad apelante parece estar solicitando, es que se le permitiera a su representada continuar con la exploración de "SAN SEBASTIAN", sin considerar el vencimiento del plazo para el cual había sido otorgado; lo cual es legalmente improcedente, bajo cualquier punto de vista, por carecer este Despacho de facultad legal para acceder a dicha pretensión.

IV- Respecto de lo manifestado por el recurrente, es necesario expresar lo siguiente:

A) En el escrito recibido el día veinte de enero del corriente año, el Licenciado PEDRO VALLE manifiesta que su representada se encontraba "impedida" desde el día diez de octubre de dos mil seis, fecha en la cual se presentó la solicitud de permiso ambiental ante el Ministerio de Medio Ambiente, y de conformidad con el Artículo 229 del Código de Procedimientos Civiles, "al impedido con justa causa no le corre término"; por lo cual solicita que no le corra el plazo de la Licencia de exploración, que es de cuatro años, según Resolución 27 del día veinticuatro de febrero de dos mil tres. En otras palabras, el recurrente solicita la suspensión del plazo otorgado para la exploración desde el día diez de octubre de dos mil seis, fecha en la cual su representada estaba "impedida" de presentar el permiso ambiental, por razones ajenas a su voluntad.

B) En este punto, hay que diferenciar dos plazos o términos: uno es el plazo otorgado para hacer uso de la Licencia de exploración, y otro es el plazo de treinta días otorgado por la Dirección de Hidrocarburos y Minas para evacuar la prevención hecha de presentar el permiso ambiental, como requisito para atender la solicitud de prórroga de la Licencia de exploración. En cuanto al primer plazo, de conformidad con el Artículo 86 inciso último de la Constitución ya mencionado, los funcionarios de Gobierno no tienen más facultades que las que expresamente les da la ley; y para el presente caso, ni la Dirección de Hidrocarburos y Minas ni este Despacho están facultados por la ley para suspender plazos de licencias de exploración. El Artículo 26 de la Ley de Minería regula casos de suspensión de operaciones mineras, pero no del plazo otorgado para una licencia o una concesión. En consecuencia, lo solicitado por el recurrente, de que se le conceda suspensión del plazo de la licencia de exploración, no es atendible; y esto lleva a confirmar la resolución apelada. En cuanto al segundo plazo, que se refiere a los treinta días concedidos para que presentara el permiso ambiental, como requisito previo para evaluar la admisión de su solicitud de prórroga de la licencia de exploración, según se observa en el expediente, le fue prorrogado durante un tiempo más que prudencial, y ante la no presentación del mencionado permiso, la Dirección de Hidrocarburos y Minas procedió conforme a lo dispuesto en el Artículo 38 de la Ley de Minería, declarando sin lugar la solicitud, conforme era procedente.

POR TANTO:

Con base en los considerandos anteriores y los artículos 86 y 235 de la Constitución de la República; 4, 6,13, 37, 38 y 45 de la Ley de Minería; 1, 19, 21, 22 y 86 de la Ley de Medio Ambiente; y 22 del Reglamento General de la Ley de Medio Ambiente, este Ministerio

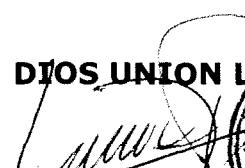
RESUELVE:

1º) NO HA LUGAR a lo solicitado por el Licenciado PEDRO VALLE, en calidad de Apoderado General y Judicial de la Sociedad Salvadoreña "**COMMERCE GROUP CORPORATION**", sobre dejar sin efecto la Resolución número Doscientos Cuarenta y Seis, emitida por la Dirección de Hidrocarburos y Minas de este Ministerio, a las nueve horas del día veintiocho de octubre de dos mil ocho, por medio de la cual se declaró sin lugar la solicitud de Prórroga de la Licencia de Exploración de Minerales, específicamente oro y plata, en el área denominada "SAN SEBASTIAN".

2º) CONFIRMASE la resolución antes mencionada emitida por la Dirección de Hidrocarburos y Minas; quedándosele expedito el derecho del apelante a presentar nueva solicitud, siempre que se cumplan con los requisitos establecidos en la ley.

3º) Oportunamente, vuelvan las diligencias a su lugar de origen.
NOTIFIQUESE. RICARDO ESMAHAN, MINISTRO "*****"

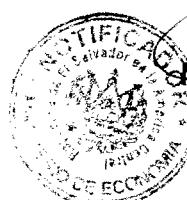
El que hago de su conocimiento para los efectos legales consiguientes.


DIOS UNION LIBERTAD
ERIC ALEXANDER ALVAREZ,
SUBDIRECTOR DE ASESORIA JURIDICA


Exp. 130-C-08
(L-019-2002)

En la ciudad de San Salvador, a las quince horas y cinco minutos del día dos de junio de dos mil nueve. Presente en La Dirección de Asesoría Jurídica del Ministerio de Economía El Licenciado **Pedro Valle de Paz**, en calidad de Apoderado General Judicial de la Sociedad **Commerce Group Corp**, S.A. de C. V., para recibir notificación, a quien identifique por medio de su Documento Único de Identidad número cero un millón doscientos sesenta y ocho mil setecientos setenta y dos- nueve, y le notifique la Resolución número doscientos uno que antecede de las diez horas treinta minutos del día veintisiete de mayo de dos mil nueve, leyéndosela íntegramente y entregándole copia de la misma, quedando enterado de su contenido, y para que le sirva de legal notificación firmamos la presente.-

Notificado.



Manuel Rubio.
Notificador.

FULL TRANSLATION

[stamp]

460

MINISTRY OF ECONOMY
REPUBLIC OF EL SALVADOR, C.A.

San Salvador, May 29, 2009

RESOLUTION No. 201 has been issued and reads, verbatim: “**MINISTRY OF ECONOMY:** San Salvador, 10:30 a.m. on May twenty-seventh, two thousand nine.

Having reviewed the Appeal filed by **PEDRO VALLE**, already identified as Attorney for “**COMMERCE GROUP CORPORATION**,” before this Minister of Economy, against Resolution number two hundred forty-six issued by the Bureau of Hydrocarbons and Mines of this Ministry at 9:00 a.m. on October twenty-eighth, two thousand eight.

**THE RECORD HAVING BEEN READ,
AND WHEREAS:**

I- The Bureau of Hydrocarbons and Mines issued the aforementioned Resolution, rejecting the request for extension of the Mineral Exploration License, specifically for gold and silver, in the “SAN SEBASTIAN” area. This request was rejected because the environmental permit required by Article 21 e) and Article 24 b) of the Environmental Law was not submitted. Disagreeing with this, “**COMMERCE GROUP CORPORATION**” filed an Appeal requesting that “an evidentiary period be opened in these proceedings in order to determine legal compliance of the process rejecting the application submitted on March eighth, two thousand seven.”

II- Subsequently, the aforementioned Appeal was accepted and, in accordance with article 45 of the Mining Law, the appellant was granted a hearing pursuant to law. Exercising its right, it stated, in summary: **(1)** that the application for the environmental permit was submitted to the Ministry of Environment on October tenth, two thousand six, and that on May sixteenth, two thousand seven the Bureau of Hydrocarbons and Mines issued it a warning notice regarding submission of that permit, not having it at that date; **(2)** that, some months having gone by with no response from the Ministry of Environment, it submitted a request for a moratorium period on October thirty-first, two thousand seven, “which was intended to address the warning notice issued by the Bureau of Hydrocarbons and Mines regarding submission of the environmental impact study,” and **(3)** that, in accordance with Article 229 of the Code of Civil Procedure, “the party that has been impeded with just cause is not subject to a deadline, nor is he deemed to be in contempt in terms of considering the complaint to have been answered or considering the action to have been abandoned,” and such impediment began on October tenth, two thousand six, the date on which the respective request was submitted

to the Ministry of Environment.

III- With respect to the rejection of the application submitted by the appellant, the following considerations are necessary:

A) In accordance with Article 86, last subsection, and Article 235 of the Constitution, Government officials have no powers other than those expressly conferred by law and, when taking office, they swear to “comply with and enforce the Constitution” and promise “faithful performance of the duties of the position.” Submission of the environmental permit as a prerequisite for granting the exploration license is governed by Article 21 e) of the Environmental Law, which says, verbatim: *“Every individual or legal entity shall submit the respective Environmental Impact Study in order to carry out the following activities, works, or projects: ... e) Exploration, exploitation, and industrial processing of minerals and fossil fuels ...”* Moreover, Article 19 of the same Environmental Law says: *“For initiation and operation of the activities, works, or projects defined herein, an environmental permit is required. The Ministry shall be responsible for issuing the environmental permit, subject to approval of the environmental impact study.”* This Article 19 is entitled “AUTHORITY FOR ENVIRONMENTAL PERMIT,” and it is supplemented by the provisions of Article 21 of the same Law, entitled precisely “ACTIVITIES, WORKS, OR PROJECTS THAT SHALL REQUIRE AN ENVIRONMENTAL IMPACT STUDY.” This means that the submission of the environmental permit is not optional, but mandatory for the party requesting an exploration license and, in turn, it is the duty of the Bureau of Hydrocarbons and Mines to request it as a prerequisite for the extension of said license, so that, if said requirement is not met, the Bureau cannot extend the license, even if the other requirements are met. Article 38, second part, of the Mining Law says: *“... if the application is not submitted with the requirements specified by law, the interested party shall be granted up to 30 days to correct the omissions; if they are not corrected after said time period has elapsed, the application shall be rejected and its file archived.”* In this case, by ruling of 9:00 a.m. on May sixteenth, two thousand seven, the Bureau of Hydrocarbons and Mines decided to warn “COMMERCE GROUP CORPORATION” to submit, within thirty days, among other things, a copy, certified by a Notary, of the Environmental Permit for the “SAN SEBASTIAN” Exploration License. On the fourteenth of June of the same year, PEDRO VALLE, as Attorney for the aforementioned Company, submitted a written statement stating that he had already made the respective request to the Ministry of Environment to obtain the Environmental Permit on October tenth, two thousand six and, as of that date, he had not received any response; he asked that the warning notice be considered to have been complied with and that a final resolution be granted to the Company for the requested extension of the Exploration License. The foregoing demonstrates that the Bureau of Hydrocarbons and Mines complied with the provisions established in the Mining Law with respect to granting the time period provided for by law to correct the omission, and that the applicant was unable to comply with the legal requirement.

MINISTRY OF ECONOMY
REPUBLIC OF EL SALVADOR, C.A.

B) According to the written response submitted on October thirty-first, two thousand seven, PEDRO VALLE, always as Attorney for “COMMERCE GROUP CORPORATION,” requested a moratorium period for the “SAN SEBASTIAN” Exploration License, so that “the time period legally granted for said License would not be considered, until the resolution of the application, which was submitted at the appropriate time” both at this Ministry and the Ministry of Environment. What the appellant company’s attorney seems to be asking for is that his client be permitted to continue exploring “SAN SEBASTIAN” without consideration of the expiration of the time period for which it had been granted, which is legally inappropriate from any standpoint, because this Office has no legal power to grant such a request.

IV- With respect to the appellant’s assertions, it is necessary to state the following:

A) In the written submission received on January twentieth of this year, PEDRO VALLE says that his client has been “impeded,” since October tenth, two thousand six, when the request for the environmental permit was submitted to the Ministry of Environment, and in accordance with Article 229 of the Code of Civil Procedure, “the party that has been impeded with just cause is not subject to a deadline,” wherefore he requests that the term of the Exploration License, which is four years pursuant to Resolution 27 of February twenty-fourth, two thousand three, not expire. In other words, the appellant requests suspension of the time period granted for exploration from October tenth, two thousand six, when his client was “impeded” from submitting the environmental permit for reasons beyond its control.

B) On this point, it is necessary to differentiate two time periods or terms: one is the time period granted for use of the Exploration License, and the other is the time period of thirty days granted by the Bureau of Hydrocarbons and Mines for addressing the warning notice to submit the environmental permit as a requirement to process the application for extension of the Exploration License. Regarding the former time period, in accordance with article 86, last subsection of the Constitution, Government officials have no powers other than those expressly conferred by law; and in this case, neither the Bureau of Hydrocarbons and Mines, nor this Office, is authorized by law to suspend time periods of exploration licenses. Article 26 of the Mining Law governs cases of suspension of mining operations, but not of the time period granted for a license or concession. Consequently, what the appellant is requesting, that it be granted suspension of the time period of the exploration license, cannot be addressed, and this means that the appealed resolution must be upheld. Regarding the latter time period, which is the thirty days granted for submission of the environmental permit, as a prerequisite for evaluating admission of its application for extension of the exploration license, as noted in the case file, it was extended for a period of time that was more than reasonable and, given the failure to submit the aforementioned permit, the Bureau of Hydrocarbons and Mines proceeded in accordance with the provisions of Article 38 of the Mining Law, rejecting the application, as was proper.

THEREFORE:

Based on the foregoing whereas clauses and articles 86 and 235 of the Constitution of the Republic; articles 4, 6, 13, 37, 38, and 45 of the Mining Law; Articles 1, 19, 21, 22, and 86 of the Environmental Law, and article 22 of the Regulations of the Environmental Law, this Ministry:

RESOLVES:

- 1) TO REJECT** the request of Mr. PEDRO VALLE, as Attorney for the Salvadoran company "**COMMERCE GROUP CORPORATION**," regarding nullification of Resolution number two hundred forty-six, issued by the Bureau of Hydrocarbons and Mines of this Ministry at 9:00 a.m. on October twenty-eighth, two thousand eight, rejecting the application for Extension of the Mineral Exploration License, specifically gold and silver, in the "SAN SEBASTIAN" area.
- 2) TO UPHOLD** the aforementioned resolution issued by the Bureau of Hydrocarbons and Mines, leaving clear the right of the appellant to submit a new application, provided that the requirements established by law are met.
- 3) At the proper time, the record of the proceedings shall be returned to their place of origin.**
LET NOTICE BE GIVEN. RICARDO ESMAHAN, MINISTER"

Of which I advise you for the appropriate legal purposes.

GOD UNION LIBERTY
[signature]
[stamp:] **MINISTRY OF ECONOMY**
Office of General Counsel
ERIC ALEXANDER ALVAYERO
ASSISTANT DIRECTOR, OFFICE OF LEGAL COUNSEL

**Exp. 130-C-08
(L-019-2002)**

City of San Salvador, at 3:05 p.m. on June second, two thousand nine. **Pedro Valle de Paz**, in his capacity as Attorney for the company **Comerce Group Corp.**, S.A. de C.V., was present to receive notification, and who is identified by his Unique Identification Number zero, one million, two hundred seventy-eight thousand, seven hundred seventy-two, nine, whom I notified of the preceding Resolution number two hundred one of 10:30 a.m. on May twenty-seventh, two thousand nine, having read it to him in its entirety, and given him a copy of the same, is apprised of its contents. For the purposes of legal notification, we sign this document.-

[signature]
Notified Party

Manuel Rubio
Notification Agent

[stamp]
NOTIFICATION AGENT
MINISTRY OF ECONOMY
REPUBLIC OF EL SALVADOR, C.A